

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Rodrigo Gómez García, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre las políticas del Gobierno para acabar con el mercado de falsificaciones en nuestro país.

Congreso de los Diputados, a 7 de agosto de 2018

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada verano se visualiza, con la multiplicación del *top manta*, el problema global en torno al comercio internacional de productos falsificados y pirateados. Este comercio representa hasta el 2,5% del comercio mundial, unos 338.000 millones de euros, y hasta el 5% de todas las importaciones de la UE (85.000 millones de euros).

Según los datos recogidos por la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), España es el segundo mercado de la UE para las falsificaciones, solo superado por Italia. El impacto de las falsificaciones en la economía española supondría un agujero de 67.405 empleos directos y 7.659 millones en ventas al año.

Los derechos de propiedad intelectual son fundamentales en industrias que suponen un 40% del PIB español y emplean a 4,5 millones de personas, un 25% del total. El sector textil, con 4.127 millones de pérdidas de ventas, es el más afectado por esta actividad ilegal.

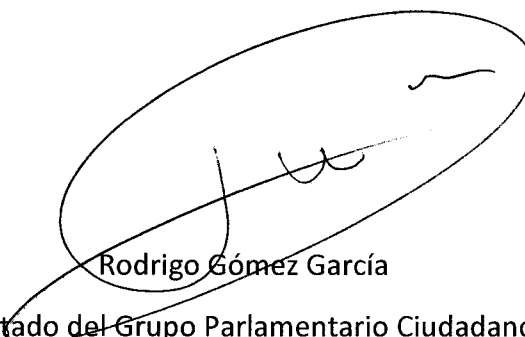
La Confederación Española de Comercio (CEC) ha advertido del "gigantesco impacto" que tiene el *top manta* para el pequeño y mediano comercio, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona.

Un reciente informe elaborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés) señala que China sigue siendo el principal país productor de productos falsificados, que se venden en todo el mundo, mientras que Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Singapur se destacan como los países donde estos productos hacen escala antes de llegar al consumidor. Este informe alerta sobre la creciente importancia del uso de los servicios postales convencionales y del comercio electrónico por parte de las mafias de falsificadores.

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué está haciendo el Gobierno para detener el flujo de falsificaciones que inunda las calles de nuestro país?
2. ¿Qué impacto económico y sobre el empleo en nuestro país calcula que tiene la actual penetración de falsificaciones en España?

3. ¿Qué garantías ha impuesto el Gobierno para proteger los derechos de los consumidores a comprar productos legítimos a través del comercio electrónico?
4. ¿Qué información y seguimiento hace el Gobierno sobre las mafias involucradas en la producción comercialización de falsificaciones?
5. ¿Qué vínculos ha encontrado el Gobierno entre el comercio de falsificaciones y la inmigración ilegal?
6. ¿Qué controles y políticas contra las falsificaciones se han implantado en Correos?



Rodrigo Gómez García

Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos